Área	Rol
Grupo de Acuerdos Estratégicos	<ul style="list-style-type: none"> - Revisar el Documento Previo proyectado por el área solicitante. - Participar en el Comité Estratégico. - Llevar a cabo los trámites de los Acuerdos Estratégicos ya sean nuevos o sus adiciones, modificaciones y/o prórrogas.
Comité Estratégico	<ul style="list-style-type: none"> - Emitir observaciones sobre los proyectos de Acuerdos Estratégicos puestos a su consideración. - Recomendar la celebración de los Acuerdos Estratégicos puestos a su consideración.

3.8.3. Documento previo

El área solicitante deberá elaborar este Documento para todos los Acuerdos Estratégicos, de acuerdo con lo establecido en la herramienta de gestión de calidad, en el cual se consignan las razones específicas de conveniencia de la celebración del acuerdo acompañadas del correspondiente ejercicio analítico donde se identifiquen las actividades a desarrollar en virtud del acuerdo y su directa relación con el Plan Estratégico o las funciones y objetivos de la Entidad.

3.8.4. Garantías

Se estipulará la constitución de garantías, según se determine en el Documento previo de conformidad con lo establecido en el **Anexo número 3 Régimen de Garantías del Manual de Contratación**.

3.8.5. Modificación de los Acuerdos

Las modificaciones u otrosíes reposarán en documento celebrado por las partes, donde conste cualquier cambio efectuado al contenido del acuerdo, manteniendo sus elementos esenciales. Estas modificaciones serán numeradas en forma consecutiva y deberán estar sustentados en los informes o estudios que evidencien su necesidad y la proporcionalidad de su contenido en atención a las circunstancias que les sirven de causa.

El contenido de los otrosíes podrá versar sobre:

3.8.5.1. Adición: Es el otrosí que aumenta el valor económico del Acuerdo Estratégico, el cual responderá necesariamente a una ampliación del alcance del objeto contractual.

3.8.5.2. Prórroga: Documento suscrito por las partes, donde constan modificaciones en el plazo de ejecución del Acuerdo Estratégico.

3.8.5.3. Otros acuerdos modificatorios: Son aquellos, donde constan las modificaciones al acuerdo que combina los elementos señalados en los anteriores literales, o se adoptan otras modificaciones que no afectan los elementos esenciales del negocio jurídico.

Nota: Las modificaciones de los Acuerdos indicadas en este numeral no deberán ser presentados al comité, por lo que es responsabilidad del área y su justificación se plasmará en el formato para tal fin.

3.9. Reglas generales sobre liquidación

En cuanto a la liquidación de los acuerdos estratégicos se deberá proceder de acuerdo con lo establecido en el Manual de Contratación de la Entidad.

(C. F.).

ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 000171 DE 2023

(mayo 3)

por la cual se modifica la Resolución 675 de 2019 y se excluye el Permiso Especial de Permanencia (PEP) del listado de documentos válidos para registro y presentación de exámenes ante el Icfes.

El Director General del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes), en ejercicio de sus atribuciones legales y en especial las conferidas por la Ley 1324 de 2009, por el numeral 9 del artículo 9º del Decreto 5014 de 2009, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley 1324 de 2009¹ establece que el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) es una empresa estatal de carácter social del sector Educación Nacional, entidad pública descentralizada del orden nacional, de naturaleza especial, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, vinculada al Ministerio de Educación Nacional.

Que el Icfes tiene a su cargo la facultad legal de dirigir, coordinar y reglamentar la presentación de los exámenes de Estado Saber 11, Validación del Bachillerato, Saber Pro, Saber TyT y Pre Saber, con base en los artículos 2.3.3.3.7.2, 2.3.3.3.4.3.1, 2.5.3.4.1.3 y

¹ “Por la cual se fijan parámetros y criterios para organizar el sistema de evaluación de resultados de la calidad de la educación, se dictan normas para el fomento de una cultura de la evaluación, en procura de facilitar la inspección y vigilancia del Estado y se transforma el ICFES”.

2.3.3.3.7.3, en su orden, del Decreto 1075 de 2015², por consiguiente, con fundamento en dicha responsabilidad, este Instituto expidió la Resolución 675 de 2019, “*Por la cual se reglamenta el proceso de inscripción a los exámenes que realiza el Icfes*”, la cual, en su artículo 22 contiene el listado de los documentos válidos para el registro e identificación de las pruebas que aplica este instituto.

Que, el artículo transitorio 1º de dicho acto administrativo, establece un listado adicional de documentos encaminado a que los examinandos de nacionalidad venezolana bajo régimen de protección temporal puedan inscribirse a cualquier examen de Estado, entre los cuales se encuentran el (i) Permiso por Protección Temporal (PPT), y (ii) Permiso Especial de Permanencia (PEP), ambos expedidos por la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia³.

Que, por su parte el artículo transitorio 3º determina la posibilidad de identificarse, al momento de la presentación del examen, entre otras formas, con el PEP, y el 4º indica que las normas transitorias contenidas en la Resolución 675 de 2019 relacionadas con “[...] *Los Nacionales Venezolanos en Situación Migratoria Irregular*” permanecerán mientras esté vigente “[...] *el PEP según los periodos establecidos por la Resolución 1272 de 2017*”⁴ de Migración Colombia o aquellas que la sustituyan o modifiquen”.

Que, por conducto del Decreto 216 de 1º de marzo de 2021⁵, el Gobierno nacional adoptó el “[...] *Estatuto de Protección Temporal para Migrantes Venezolanos* [...]” compuesto por el Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV) y el Permiso por Protección Temporal (PPT). El PPT es un “[...] *mecanismo de regularización migratoria y documento de identificación, que autoriza a los migrantes venezolanos a permanecer en el territorio nacional en condiciones de regularidad migratoria especiales, y a ejercer durante su vigencia, cualquier actividad u ocupación legal en el país, incluidas aquellas que se desarrollen en virtud de una vinculación o de contrato laboral* [...]”.

Que, el artículo 19⁶ del Decreto 216 de 2021 determinó el régimen de transición de vigencia del PEP por el término máximo de 2 años contados a partir de la publicación de dicho estatuto en el **Diario Oficial**, lo que ocurrió el 1º de marzo de 2021, por lo cual el PEP dejó de tenerse como documento válido de identificación en Colombia para la población venezolana a partir del 28 de febrero de 2023, y a partir de esa fecha únicamente queda vigente el PPT⁷.

Que, en esa medida, para dar claridad a los posibles examinados de nacionalidad venezolana, es necesario modificar los artículos transitorios 1º, 3º y 4º de la Resolución 675 de 2019 con el propósito de excluir el PEP de los documentos válidos para el registro, presentación e identificación en los exámenes que aplica del Icfes.

Que, de otro lado la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia otorgó un plazo para registrarse en el RUMV y obtener su PPT a las personas que tenían el PEP de acuerdo con lo establecido en el Decreto 216 de 2021, y la Resolución 971 del 28 de abril de ese mismo año⁸ (por la cual se implementa dicho estatuto), y, determinó que mientras aquellas adelantan dicho trámite es dable expedirles una certificación de trámite de permiso por protección temporal (PPT), la cual en los términos establecidos en la Resolución 4278 de 30 de diciembre de 2022, les sirve para “[...] *ingresar, permanecer, transportarse, salir del territorio colombiano y acceder a la oferta de servicios del Estado colombiano y las instituciones particulares, mientras se decide y se otorga el documento final* [...]”, por lo que hay lugar a incluir este documento en el reglamento de pruebas del Icfes previsto en la Resolución 675 de 2019.

² “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación”.

³ Asimismo, señala que quienes “[...] se hubieren inscrito con el PEP se identificarán, el día del examen, con el PEP y el Documento Nacional de Identidad Venezolano, en los términos establecidos por Migración Colombia”.

⁴ “Por la cual se implementa el Permiso Especial de Permanencia (PEP) creado mediante Resolución 5797 del 25 de julio de 2017 del Ministerio de Relaciones Exteriores, y se establece el procedimiento para su expedición a los nacionales venezolanos”.

⁵ “Por medio del cual se adopta el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos Bajo Régimen de Protección Temporal y se dictan otras disposiciones en materia migratoria”.

⁶ “A partir de la publicación del presente decreto, no se expedirá ningún Permiso Especial de Permanencia nuevo, y todos los Permisos Especiales de Permanencia cualquiera sea su fase de expedición, incluido el PEPFF, que se encuentren vigentes, quedarán prorrogados automáticamente por el término de dos (2) años, desde dicha fecha.

Parágrafo 1º. Los titulares del Permiso Especial de Permanencia que no hubieren podido renovarlo dentro de los plazos establecidos para dicha renovación podrán hacerlo, de conformidad con lo establecido mediante acto administrativo por la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia.

Parágrafo 2º. Los ciudadanos venezolanos que en virtud de la Resolución 2052 <sic, 2502> del 23 de septiembre de 2020 expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, y de la Resolución 2359 del 29 de septiembre de 2020 expedida por la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, cumplen con los requisitos para la expedición del Permiso Especial de Permanencia y no pudieron obtenerlo dentro del plazo establecido en dichas resoluciones, podrán hacerlo de conformidad con lo establecido mediante acto administrativo por la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia.

Parágrafo 3º. El Permiso Especial de Permanencia para el fomento de la formalización (PEPFF) podrá expedirse para aquellos a quienes autorice el Ministerio del Trabajo hasta noventa (90) días calendario posteriores a la publicación del presente decreto, y con una vigencia máxima de dos (2) años contados a partir de la publicación del presente decreto”.

⁷ Parágrafo transitorio del artículo 10 del Decreto 216 de 2021 “[...] Créase el Permiso por Protección Temporal (PPT) contemplado en el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos bajo Régimen de Protección Temporal, el cual será desarrollado, implementado y expedido por la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia. El Permiso por Protección Temporal (PPT) tendrá vigencia hasta la fecha del último día de vigencia del presente Estatuto y no será prorrogable”.

⁸ “Por la cual se implementa el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos adoptado por medio del Decreto 216 de 2021”.

Que lo anterior, permite concluir que comoquiera que el PEP perdió vigencia el 28 de febrero de 2023, de acuerdo con lo señalado en el artículo 19 del Decreto 216 de 2021 y ya no es un documento válido para la inscripción y presentación de los exámenes de Estado que aplica el Icfes, resulta necesario adecuar los artículos transitorios 1º, 3º y 4º de la Resolución 675 de 2019 con el propósito de excluirlo del listado allí relacionado e incluir la certificación de trámite de permiso por protección temporal (PPT) o cualquier otro documento que con el mismo fin expida la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1º. Modifíquense los artículos transitorios 1º, 3º y 4º de la Resolución 675 de 2019, los cuales quedarán así:

Artículo Transitorio 1º. Listado Adicional de Documentos para el Registro y presentación de un examen para los migrantes venezolanos. Además de los documentos señalados en el artículo 22 de la presente resolución, los nacionales venezolanos bajo régimen de protección temporal podrán inscribirse a cualquier Examen de Estado, Saber 11, Validación del Bachillerato, Saber Pro, Saber TyT y Pre Saber, con alguno de los siguientes documentos:

1. Permiso por Protección Temporal (PPT) expedido por Migración Colombia;
2. Certificación de trámite de permiso por protección temporal (PPT) o cualquier otro documento que con el mismo fin expida la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia.

Parágrafo 1º. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con la certificación de trámite de permiso por protección temporal (PPT) se identificarán, el día del examen, con dicho documento y con el Documento Nacional de Identidad (DNI) venezolano, sin perjuicio de la aplicación del procedimiento de toma de huellas referido en el artículo 23 de la presente resolución.

Parágrafo 2º. En caso de que el Gobierno nacional realice alguna modificación a los documentos que son válidos para entender regularizada la condición de los nacionales venezolanos en el país, se entenderá incluida dentro del presente artículo, sin necesidad de ajustes a la resolución.

Artículo Transitorio 3º. Presentación del Examen Saber 11 de Estudiantes Inscritos con Nes. Los estudiantes venezolanos inscritos con el NES, que al momento de la presentación del examen no cuenten con alguno de los documentos señalados en el artículo 22 de la presente resolución o con el PPT, podrán identificarse e ingresar al sitio de aplicación del examen presentando un documento de identificación con foto, entre los que se incluyen el carné estudiantil de la Institución Educativa que lo inscribió al examen, el Documento Nacional de Identificación (DNI) venezolano o algún otro documento emitido por una autoridad pública colombiana.

En este procedimiento, el Icfes verificará solamente el nombre del examinando, sin perjuicio de que la entidad aplique los controles concomitantes referidos en el artículo 14 de la presente resolución.

Parágrafo 1º. La situación señalada en esta disposición dará lugar a la aplicación del procedimiento de toma de huellas referido en el artículo 23 de la presente resolución.

Parágrafo 2º. En caso de que el día del examen el examinando inscrito con NES se identifique con alguno de los documentos válidos de identidad señalados en el artículo 22 de la presente resolución o con el PPT, el interesado está facultado para solicitar ante el Icfes la correspondiente actualización de datos.

Artículo Transitorio 4º. Vigencia de los Artículos Transitorios. Los artículos transitorios regirán mientras esté vigente el PPT según los términos establecidos por el Decreto 216 de 2021 o aquellas normas que lo sustituyan o modifiquen.

Artículo 3º. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 3 de mayo de 2023.

El Director General,

Andrés Molano Flechas.

(C. F.)

VARIOS

Contraloría General de la República

RESOLUCIONES REGLAMENTARIAS ORGÁNICAS

RESOLUCIÓN REG-ORG NÚMERO 0063-2023 DE 2023

(mayo 3)

por la cual se reglamenta la rendición de información por parte de las entidades o particulares que manejen fondos o bienes públicos, en todos los niveles administrativos y respecto de todo tipo de recursos públicos, para la vigilancia y el control fiscal de las finanzas y contabilidad públicas.

El Contralor General de la República, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las conferidas en los incisos 1º, 2º, 3º, 4º, 11, 12 y 15 del artículo 268 de la Constitución Política, en los numerales 1 y 7 del Decreto Ley 267 de 2000, en el inciso 2º del artículo 5º y en el artículo 7º del Decreto Ley 403 de 2020, y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo previsto en el inciso primero del artículo 267 de la Constitución Política, modificado por el artículo 1º del Acto Legislativo número 04 del 18 de septiembre de 2019 la Contraloría General de la República vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes públicos, en todos los niveles administrativos y respecto de todo tipo de recursos públicos.

Que, en consonancia con lo anterior, el artículo 272 de la Constitución Política modificado por el artículo 4º del Acto Legislativo número 4 de 2019, establece que la vigilancia de la gestión fiscal de los departamentos, distritos y municipios en los que existan contralorías corresponderá a estas, en forma concurrente con la Contraloría General de la República.

Que, en consecuencia, la parte final del inciso 1º del artículo 267 y los incisos 3º y 6º del artículo 272 de la Constitución Política, establecen que en observancia de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, la ley señalará cómo se adelanta el ejercicio concurrente de las competencias atribuidas a la Contraloría General de la República y las Contralorías Territoriales, indicando que el control ejercido por la Contraloría General de la República será preferente.

Que el Decreto Ley 403 de 2020, "Por el cual se dictan normas para la correcta implementación del Acto Legislativo número 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal", en su Título II, regula las competencias de la Contraloría General de la República y las contralorías territoriales, estableciendo de manera general en el artículo 4º que las contralorías territoriales vigilan y controlan la gestión fiscal de los departamentos, distritos, municipios y demás entidades del orden territorial, así como a los demás sujetos de control dentro de su respectiva jurisdicción, en relación con los recursos endógenos, en forma concurrente con la Contraloría General de la República, no obstante aclara que la vigilancia y control fiscal de los recursos transferidos o las rentas cedidas por la Nación a cualquier título a las entidades territoriales, será prevalente con sujeción a lo dispuesto en normas especiales.

Que el artículo 6º del precitado decreto, establece que el ejercicio de la competencia prevalente de la Contraloría General de la República respecto de aquellos recursos en lo que concurre con las contralorías territoriales podrá ejercerse en cualquier tiempo conforme a los siguientes mecanismos: (a) vigilancia fiscal concurrente integral o selectiva, transitoria o permanente; (b) Plan Nacional de Vigilancia y Control Fiscal; (c) Sistema Nacional de Control Fiscal (Sinacof); (d) acciones conjuntas y coordinadas entre contralorías; (e) intervención funcional de oficio; (f) intervención funcional excepcional; (g) fuero de atracción; y (h) los demás que determine el Contralor General de la República, bajo criterios de necesidad, pertinencia, razonabilidad, proporcionalidad y especialidad, sin que, en ningún caso, implique el vaciamiento de competencias de las contralorías territoriales.

Que igualmente, el artículo 7º del Decreto Ley 403 de 2020, establece que la Contraloría General de la República podrá ejercer vigilancia de la gestión fiscal a los sujetos u objetos de control de las contralorías territoriales, de manera permanente o transitoria, integral o selectiva.

Que, sin perjuicio de la concurrencia en el ejercicio de la vigilancia y el control fiscal, en el Contralor General de la República recaen competencias que le son exclusivas de conformidad con lo previsto en el artículo 268 de la Constitución Política, modificado por el artículo 2º del Acto Legislativo número 04 de 2019, entre otras, las siguientes: (i) prescribir los métodos y la forma de rendir cuentas los responsables del manejo de fondos o bienes de la Nación e indicar los criterios de evaluación financiera, operativa y de resultados que deberán seguirse (núm. 1); (ii) llevar un registro de la deuda pública de la Nación y de las entidades descentralizadas territorialmente o por servicios (núm. 3); (iii) exigir informes sobre su gestión fiscal a los empleados oficiales de cualquier orden y a toda persona o entidad pública o privada que administre fondos o bienes públicos (núm. 4); (iv) presentar informes al Congreso de la República y al Presidente de la República sobre el cumplimiento de sus funciones y certificación sobre la situación de las finanzas del Estado (núm. 11); (v) dictar normas generales para armonizar los sistemas de control fiscal de todas las entidades públicas del orden nacional y territorial; y dirigir e implementar, con apoyo de la Auditoría General de la República, el Sistema Nacional de Control Fiscal, para la unificación y estandarización de la vigilancia y control de la gestión fiscal (núm. 12); y (vi) presentar a la Cámara de Representantes la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro y certificar el balance de la Hacienda presentado al Congreso por el Contador General de la Nación (núm. 15).

Que el artículo 354 de la Constitución Política le atribuye a la Contraloría General de la República la competencia para llevar la contabilidad referente a la ejecución del Presupuesto General de la Nación, en este sentido el artículo 36 de la Ley 42 de 1993, establece que le corresponde a este ente de control registrar la ejecución de los ingresos y los gastos que afectan las cuentas del tesoro nacional, para lo cual tendrá en cuenta los reconocimientos y los recaudos y las ordenaciones de gastos y de pagos.

Que igualmente, el parágrafo de dicha disposición establece que seis meses después de concluido el año fiscal, el Gobierno nacional enviará al Congreso el Balance de la Hacienda, auditado por la Contraloría General de la República, para su conocimiento y análisis. En ese orden, según lo preceptuado en el artículo 47 de la Ley 42 de 1993, antes del 1º de julio de cada año, la Contraloría General de la República auditará y